



17

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA**

San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Radicación número: 54-518-33-33-001-2017-00179-01**

**Actor: Rene Augusto Durán Corona**

**Demandado: Municipio de San José de Cúcuta**

**Medio de control: Cumplimiento de normas con fuerza material de ley y actos administrativos**

De conformidad con el informe secretarial visto a folio 16 del expediente, procede el Despacho a pronunciarse sobre el recurso de queja impetrado en contra del auto adiado 13 de septiembre de 2017, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, por medio del cual se negó el recurso de apelación contra la providencia del 31 de julio de último.

**I. ANTECEDENTES**

**1.1. Trámite Procesal**

Mediante apoderada, el señor Rene Augusto Durán Corona, reclamó en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y actos administrativos, se deje sin efectos la resolución N° 113 de 11 de febrero 2016 expedida por el Alcalde municipal de San José de Cúcuta, por medio de la cual declara responsable disciplinariamente por abandono del cargo y se retira del servicio por declaración de vacancia definitiva.

En providencia del 31 de julio de 2017, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona resolvió declarar la terminación anticipada por hecho superado el proceso de la referencia sin condena en costas, al considerar que lo pretendido por el accionante se logró con la expedición de la Resolución N° 1413 de 2017 por medio de la cual se trasladó al accionante de la institución educativa Técnico Carlos Ramírez Paris a la institución Nuestra Señora de Belén.

Contra la anterior decisión la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que fueron atendidos a través de proveído adiado 13 de septiembre de 2017, mediante el cual se dispuso negar por improcedente los recursos interpuestos, decisión que fue notificada por estado el día 14 de septiembre último.

Conforme a ello, el apoderado de la parte demandante directamente ante esta Corporación propuso el recurso de queja en contra del referido proveído del 13 de septiembre, mediante el cual se negaron por improcedentes tanto el recurso de reposición como el de apelación.

## II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

El artículo 245 del C.P.A.C.A. señala:

**“QUEJA.** Este recurso **procederá ante el superior cuando se niegue la apelación** o se conceda en un efecto diferente, para que lo conceda si fuera procedente o corrija tal equivocación, según el caso. Igualmente, cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este Código Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil” (ahora 353 del código general del proceso) **(negrita fuera de texto)**

El artículo 353 del C.G. del P. prevé:

**“Interposición y trámite.** El recurso de queja **deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación**, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, **el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación<sup>1</sup>.** Expedidas las copias se

<sup>1</sup> Artículo 324. DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Remisión del expediente o de sus copias. Tratándose de apelación de autos, la remisión del expediente o de sus copias al superior, se hará una vez surtido el traslado del escrito de sustentación, según lo previsto en el artículo 326 En el caso de las sentencias, el envío se hará una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del artículo 322 Sin embargo, cuando el juez de primera instancia conserve competencia para adelantar cualquier trámite, en el auto que conceda la apelación se ordenará que antes de remitirse el expediente se deje una reproducción de las piezas que el juez señale, a costa del recurrente, quien deberá suministrar las expensas necesarias en el término de cinco (5) días, so pena de ser declarado desierto Suministradas oportunamente las expensas, el secretario deberá expedirlas dentro de los tres (3) días siguientes Cuando se trate de apelación de un auto en el efecto diferido o devolutivo, se remitirá al superior una reproducción de las piezas que el juez señale, para cuya expedición se seguirá el mismo procedimiento Si el superior considera necesarias otras piezas procesales deberá solicitárselas al juez de primera instancia por auto que no tendrá recurso y por el medio más expedito, quien procederá en la forma prevista en el inciso anterior. El secretario

**remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente.** El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso. Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que corresponda en el primer caso” (negrita fuera de texto)

El auto contra el cual se interpuso el recurso de queja fue notificado el 14 de septiembre de 2017, por lo que el recurrente contaba hasta el día 19 de septiembre del año que avanza para presentar el recurso, día en que efectivamente fue interpuesto, así las cosas encuentra el Despacho que está en término.

Llama la atención del Despacho el que la parte recurrente interpusiera el mismo directamente ante ésta Corporación, debiéndolo interponer ante el Despacho que profirió la providencia, no obstante y como quiera que dicho procedimiento lo que garantiza es la expedición de las copias necesarias para el trámite del recurso de queja, y habiendo allegado los ejemplares necesarios para el efecto, en atención a los principios de acceso a la administración de la justicia y primacía del derecho sustancial sobre el formal, se dispone surtir el respectivo trámite.

Así las cosas, se tiene que mediante providencia del 31 de julio de 2017, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona resolvió declarar la terminación anticipada por hecho superado de la acción constitucional de la referencia sin condena en costas, al considerar que lo pretendido por el accionante se logró con la expedición de la Resolución N° 1413 de 2017 por medio de la cual se trasladó al accionante de la institución educativa Técnico Carlos Ramírez Paris a la institución Nuestra Señora de Belén.

Inconforme con dicha decisión la parte demandante interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que fuesen atendidos mediante auto del pasado 13 de septiembre, mediante el cual se dispuso negar por improcedentes los aludidos recursos.

---

deberá remitir el expediente o la reproducción al superior dentro del término máximo de cinco (5) días contados a partir del momento previsto en el inciso primero, o a partir del día siguiente a aquel en que el recurrente pague el valor de la reproducción, según el caso. El incumplimiento de este deber se considerará falta gravísima **Parágrafo.** Cuando el juez de primera instancia tenga habilitado el Plan de Justicia Digital, el conocimiento del asunto en segunda instancia sólo podrá ser asignado a un despacho que haga parte del mismo sistema. En ningún caso podrá ordenarse la impresión del expediente digital

Revisado el expediente se tiene que el auto adiado 31 de julio de 2017, dio por terminado el proceso de la referencia de forma anticipada conforme lo prevé el artículo 19 de la Ley 393 de 1997, ante lo cual necesario se hace determinar si para el caso en concreto, respecto a la concesión de recurso de apelación, se aplica lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997<sup>2</sup>, que dispone que las providencias que se dicten en el trámite de la acción de cumplimiento carecen de recurso alguno, excepto la sentencia y el que deniega la práctica de pruebas, como lo dispuso el A-quo; o por el contrario por tratarse del auto que pone fin al proceso es apelable, como lo señala la parte recurrente.

Para el Despacho claro se tiene que en el trámite de la acción de cumplimiento, la cual tiene norma especial que la desarrolla (Ley 393 de 1997), sólo es posible de ser recurridos, la sentencia y el auto que niega la práctica de pruebas, a través los recursos de impugnación y reposición respectivamente.

Como quiera que se discute que auto adiado 31 de julio de 2017, por medio del cual se dio por terminado el proceso de la referencia, es susceptible de los recursos de reposición y apelación, insiste el Despacho que el mismo no trata de las providencias que cita el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, por lo cual no era procedente interponer los recursos en cita, ante lo cual se considera bien denegado el recurso de apelación interpuesto, conforme se dispuso mediante auto del 13 de septiembre último, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona.

Para reforzar la decisión aquí tomada, válido se hace citar la providencia de constitucionalidad C - 319 de 2013 expedida por la Corte Constitucional que decidió la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 393 de 1997 en la cual señaló:

" .La exclusión de recursos dentro del trámite de la acción de cumplimiento está unívocamente dirigida a dotar a ese proceso de celeridad y, en consecuencia, evitar que se incurra en dilaciones injustificadas. Como se ha explicado en esta sentencia, esa característica es comúnmente compartida con las demás acciones constitucionales de índole pública, como la acción de tutela, la acción de inconstitucionalidad y las acciones populares y de grupo. Esto en razón que ha sido intención unívoca del Constituyente que estas modalidades de procedimiento conserven una estructura simple, generalmente prescindan de la obligatoriedad de representación judicial, tengan carácter subsidiario frente a otros mecanismos de

<sup>2</sup> **"ARTICULO 16. RECURSOS.** Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno<sup>2</sup>, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente "

defensa judicial y respondan a criterios de agilidad en la respuesta de la administración de justicia a los conflictos que se someten a su conocimiento

En ese sentido, es claro que la norma que excluye los recursos en relación con las decisiones diferentes a la sentencia, que se adoptan dentro del trámite de la acción de cumplimiento, cumple un fin constitucionalmente legítimo, en los términos explicados. Adicionalmente, los argumentos planteados en esta sentencia permiten concluir que una medida de ese carácter, en tanto agiliza el procedimiento e impide que incurra en dilaciones injustificadas, es idónea para cumplir con ese objetivo. ( . )

28. En conclusión, el Pleno considera que la norma acusada es compatible con los derechos de contradicción y defensa, así como con el derecho de acceso a la administración de justicia. Esto debido a que responde a la necesidad de contar con un proceso de acción de cumplimiento sin dilaciones injustificadas. A su vez, la restricción de los recursos frente a las decisiones de trámite de dicha acción, no afectan desproporcionadamente la vigencia material de las pretensiones ni la posibilidad general de exigibilidad judicial de los derechos. Por lo tanto, no excede el amplio margen de configuración legislativa que la Constitución reconoce en materia de procedimientos judiciales. "

Así mismo se hace necesario citar lo que respecto a recursos ha dispuesto el Honorable Consejo de Estado en acciones de cumplimiento, en los siguientes términos:

"...En esencia, de acuerdo con el planteamiento del problema jurídico que se fijó al resolver la demanda de constitucionalidad, se aprecia con claridad que correspondía establecer si la restricción prevista en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, constituye violación de los artículos 29 y 209 de la C.P., en específico si la no concesión del recurso de apelación entratándose del rechazo de la demanda, desconocía el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva ( . )

Esta determinación de obligatoria observancia impone a los operadores jurídicos que en el trámite de la acción de cumplimiento el recurso de alzada se restrinja a la sentencia, en estricta aplicación de la interpretación que realizó la Corte Constitucional como guardiana suprema de la Constitución Política, en la citada sentencia C- 319 de 2013

Esta regla que adquirió fuerza vinculante desde la notificación de esta sentencia<sup>3</sup>, supone que en adelante los operadores jurídicos y las demás autoridades del Estado y ciudadanos deben observar y aplicar esta *ratio decidendi*, regla que señaló que es improcedente el recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda de la acción de cumplimiento y que tal posibilidad ha de quedar restringida al fallo que resuelva dicha acción y al auto que deniegue la práctica de pruebas

Tal conclusión responde a los problemas jurídicos de procedencia del recurso de apelación y aplicación preferente de la sentencia C-319 de 2013<sup>4</sup> y, descarta la posibilidad de conceder el recurso de apelación contra las providencias que rechazan la acción de cumplimiento, en aplicación de la remisión normativa que para este caso, se sirvió del artículo 243 del CPACA, a efectos de sustentar su viabilidad. Se reitera que la Corte Constitucional determinó que el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 es norma **expresa y especial** sobre la materia, lo que impide dicha remisión al artículo en cita

Así las cosas, debe concluirse que la concesión del recurso de apelación que otorgó el tribunal a quo, desconoce la interpretación de la *ratio decidendi* de la sentencia C-319 de 2013 y pese a que se soportó en la remisión normativa que hizo al artículo 243 del CPACA, tal conclusión resulta contraria a lo señalado en dicha providencia, pues se determinó que el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 es norma **específica y**

<sup>3</sup> La desfijación del edicto de la sentencia C-319-2013 se cumplió el 29 de julio de 2013, según se aprecia en el link de consulta de procesos de la Corte Constitucional Expediente D-9341 <http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ConsultaC/proceso.php>

<sup>4</sup> Según los planteamientos que se hicieron al folio 5 de esta providencia, acápite 2 "**Problemas Jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento**"

**expresa** para este trámite, lo que implica que no existe vacío normativo a efectos de justificar esta remisión, conforme lo indicó la Corte Constitucional

Ante estas conclusiones, es claro que la posición que **debe aplicarse en adelante**, es la contenida en la sentencia de constitucionalidad bajo las explicaciones que antecedieron y que privilegian la interpretación del artículo 16 de la Ley 393 de 1997, en los términos que ha sido objeto de delimitación..<sup>5</sup>

De esta manera claro se tiene conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 y la Sentencia de constitucionalidad C-319 de 2013, que la única providencia objeto del recurso de apelación en el trámite de la acción de cumplimiento corresponde a la sentencia, así las cosas se tiene que el auto de fecha 31 de julio de 2017, proferido por el Juzgado Único Administrativo Oral del Pamplona, por medio del cual se declaró la terminación anticipada de la presente acción por hecho superado, no es susceptible del recurso de apelación, por cuanto no se encuentra consagrado en la normatividad en cita, ante lo cual se considera bien denegado el recurso de apelación interpuesto.

En razón de lo brevemente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

**RESUELVE:**

Estimar bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 31 de julio de 2017, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Judicial de Pamplona, que declaró la terminación anticipada por hecho superado de la acción de la referencia.

Archívese las presentes diligencias, previas las anotaciones Secretariales del rigor.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
SECRETARÍA GENERAL  
Por recepción en el BO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:09 a.m.  
17 OCT 2017  
Hoy

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, C P Rocio Araújo Oñate, providencia de fecha siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016), proferida en el radicado N° 25000-23-41-000-2015-02429-01



180

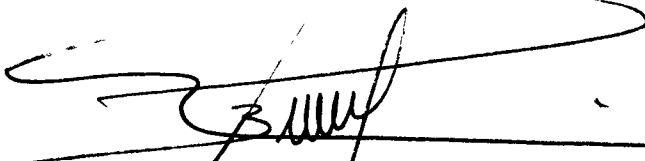
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, Once (11) de Octubre de dos mil diecisiete (2017)  
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**


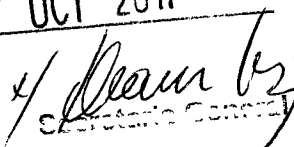
Radicado: **54001-33-33-002-2014-01486-01**  
Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Actor: **José Ángel Medina Correa**  
Demandado: **Nación – Ministerio de Educacion – Municipio de San José de Cúcuta**

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRE TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado.-

  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
Por anotación en forma adjunta a los autos la providencia de 17 de OCT 2017.  
17 OCT 2017  
  
Secretaría General



157

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, Once (11) de Octubre de dos mil diecisiete (2017)  
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

Radicado: **54001-33-33-005-2015-00030-01**  
Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Actor: **Jairo de Jesús Gomez Riaño**  
Demandado: **Nación – Ministerio de Educacion – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio**

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRE TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

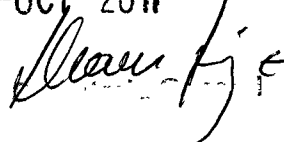
  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado.-



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
SECRETARÍA GENERAL

Por esta vía se notifica a las  
partes la providencia de la presente.

Por: **17 OCT 2017**







**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, Once (11) de Octubre de dos mil diecisiete (2017)  
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**


Radicado: **54001-33-33-005-2015-000012-01**  
Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Actor: **Luis Manuel Hurtado Hernández**  
Demandado: **Nación – Ministerio de Educación Nacional –  
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio**

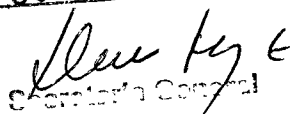
Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRE TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado.-

  
SECRETARÍA GENERAL  
CALLE 100 No. 100-100, P.O. BOX 100  
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER  
17 OCT 2017

  
Secretaría General



209

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, Once (11) de Octubre de dos mil diecisiete (2017)  
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**


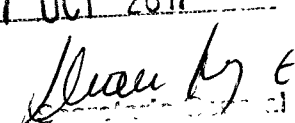
Radicado: **54001-33-33-004-2014-00809-01**  
Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Actor: **Martha Consuelo Hernández Toloza**  
Demandado: **Nación – Ministerio de Educación Nacional –  
Departamento Norte de Santander**

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRE TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado.-

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CÚCUTA  
Por el presente se notifica a las partes  
la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo.  
OCT 17 2017  




**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, Once (11) de Octubre de dos mil diecisiete (2017)  
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

Radicado: **54001-33-33-005-2014-00843-01**  
Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Actor: **María Teresa Patiño Ramírez**  
Demandado: **Nación – Ministerio de Educación Nacional –  
Municipio de San José de Cúcuta**

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRE TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado.-

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
Cúcuta, 11 de Octubre de 2017  
A las 10:33 a.m.  
17 OCT 2017

  
Secretaría General



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, Once (11) de Octubre de dos mil diecisiete (2017)  
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

Radicado: **54001-33-33-002-2014-00963-01**  
Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Actor: **Julio Eugenio Suarez Torres**  
Demandado: **Nación – Ministerio de Educación Nacional –  
Departamento Norte de Santander**

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRE TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

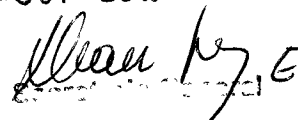
  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado.-



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER**  
**SECRETARÍA GENERAL**

Por medio de la presente, se notifica a las  
partes la presente resolución, a las 08:00 am.

11 7 OCT 2017

  
Secretaría General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
**San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)**

**Radicado** : 54-001-33-33-002-2014-01088-01  
**Actor** : Edy Marlene Vergel Gaona  
**Demandado** : Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander.

## Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de Derecho

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 155), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**Por lo brevemente expuesto, se dispone:**

1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súntase traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
**Magistrado**

LZ

17 OCT 2017



158

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

**Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA**

**San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)**

**Radicado : 54-001-33-33-002-2014-01063-01**

**Actor : Leonor Santafé Toloza**

**Demandado : Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander**

**Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de Derecho**

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 157), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**Por lo brevemente expuesto, se dispone:**

1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
**Magistrado**

L2

17 OCT 2017



150

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

**Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA**

**San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)**

**Radicado : 54-001-33-33-002-2014-01387-01**

**Actor : Blanca Nohemy Mancipe Laguado**

**Demandado : Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander**

**Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de Derecho**

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 149), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

Se deja constancia que no ha sido notificado el procurador en la forma debida, por consiguiente:

Téngase presente el auto de fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete, por secretaria notifíquese al procurador judicial delegado para actuar ante este tribunal – reparto, de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 198 del CPACA. Para tal efecto téngase como dirección de buzón electrónico las informadas por los señores procuradores judiciales delegados

**Por lo brevemente expuesto, se dispone:**

1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador Judicial delegado para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
**Magistrado**

17 OCT 2017

*Man K E*



156

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
**San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)**

**Radicado : 54-001-33-33-002-2014-01115-01**  
**Actor : Myriam Molina Chaparro**  
**Demandado : Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander**

**Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de Derecho**

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 155), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**Por lo brevemente expuesto, se dispone:**

1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
**Magistrado**

17 OCT 2017  
*[Handwritten signature]*



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER****Magistrado Ponente: HERNANDO AYALA PEÑARANDA**

San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Radicado No:** 54-001-33-40-009-2016-00835-01  
**Demandante:** Ana Mercedes Ortiz Caicedo  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

En atención al informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, mediante auto de fecha 28 de octubre de 2016, en relación con la decisión de negar la vinculación del Municipio de Cúcuta en calidad de tercero interesado, conforme lo siguiente:

**I. Antecedentes****1.1.- El Auto apelado**

El Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, profirió auto admisorio de la demanda el día 28 de octubre de 2016 (fls 35), mediante el cual negó la solicitud de vinculación del Departamento Norte de Santander en calidad de tercero interesado, hecha por la parte actora en la demanda.

Lo anterior, argumentando que en la misma no se señalaron los motivos que fundamentan la solicitud de vincular al Municipio, además consideró que a pesar de la falta de recopilación de material probatorio, dicha solicitud no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que del artículo 56 de la Ley 962 de 2005, se aprecia que el deber de proceder a reconocer y pagar las prestaciones sociales a docentes corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la delegación que se hace a las Secretarías de Educación.

Que para el caso en concreto, la Secretaría de Educación del Departamento, solo actuó como delegataria, sin que se observe que dicha obligación se haya adscrito al ente territorial.

**1.2.- Fundamentos del recurso interpuesto**

La apoderada de la parte actora, presentaron el día 10 de noviembre de 2016 (fls. 39 y s.s.), recurso de reposición en contra del auto admisorio, solicitando sea revocada la decisión de no vincular a la entidad territorial y en su lugar se ordene su vinculación, conforme a los siguientes argumentos:

Que el acto acusado fue expedido por el Secretario de Educación Departamental de Norte de Santander, y que este lo profirió en su condición de Representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con

el principio de desconcentración según lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de 2005 y el decreto 2381 de 2005.

Que siguiendo los lineamientos del H. Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, consideran que es necesaria la comparecencia de la entidad demandada, pues sus intereses como entidad territorial, se encuentran inmersos en las resultas del proceso, no por la expedición del acto administrativo, sino por la importancia de conocer la decisión que se adopte en el presente caso.

### **1.3.- Traslado del recurso**

#### **1.3.1. Parte demandante:**

Guardó silencio.

### **1.4.- Concesión del recurso.**

Mediante auto de fecha 31 de enero de 2017, obrante a folio 68 del expediente, el Juzgado Noveno Administrativo de Mixto de Cúcuta, se dio trámite de recurso de apelación al recurso de reposición presentado por las apoderadas de la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del C.G.P., y por ser procedente y haber sido presentado oportunamente, lo concedió en el efecto suspensivo ante esta Corporación.

## **II. Consideraciones**

### **2.1.- Competencia**

Este Despacho tiene competencia para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto, con fundamento en lo reglado en el art. 125 de la Ley 1437 de 2011, dado que el presente auto no es de aquellos que deban ser resueltos por la Sala, pues se trata de la decisión de negar la vinculación de un tercero al proceso.

Igualmente, la decisión de negarse la solicitud de vinculación del Departamento Norte de Santander, como tercero interesado, es apelable conforme lo reglado en los artículos 226 y 243, numeral 7 del C.P.A.C.A.

### **2.2. El asunto a resolver en esta Instancia:**

Debe el Despacho decidir si hay lugar a revocar la decisión del A quo, contenida en el auto del 28 de octubre de 2016, en virtud de la cual se decidió negar la solicitud de vinculación del Municipio de Cúcuta, como tercero interesado, tal como lo solicita la parte actora en el recurso de reposición que fue tramitado como un recurso de apelación.

El Juzgado de primera instancia llegó a tal decisión por considerar que la parte actora solicitó la vinculación del Departamento de Norte de Santander, sin exponer los motivos en que se fundamenta dicha solicitud. Que a pesar de la falta de recopilación de material probatorio, la solicitud no tiene vocación de prosperar.

ya que conforme el art. 56 de la ley 962 de 2005, el deber de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cual realiza a través de la delegación que se hace en las Secretarías de Educación de los entes territoriales.

La apoderadas de la parte actora al sustentar el recurso, señalaron que es necesaria la comparecencia de la entidad demandada, pues sus intereses como entidad territorial, se encuentran inmersas en las resultas del proceso, no por la expedición del acto administrativo, sino por la importancia de conocer la decisión que se adopte en el presente caso, por lo cual solicitan que el Departamento sea vinculado al presente proceso.

Señalan que conforme a los criterios jurisprudenciales fijados por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado en providencias de los años 2014 y 2015, es necesaria la comparecencia del Departamento, a fin de que conozca la decisión que se adopte en el presente juicio.

### **2.3.- Decisión del presente asunto en segunda Instancia.**

Este Despacho, luego de analizada la providencia apelada, los argumentos expuestos en el recurso de apelación y el ordenamiento jurídico pertinente, llega a la conclusión que habrá de confirmarse la citada providencia, dado que en el presente asunto no hay lugar a vincular al Departamento de Norte de Santander como tercero interesado en las resultas del proceso.

En efecto, como ya se anotó anteriormente, el Juzgado en el auto admisorio de la demanda decidió negar la solicitud de vinculación del Departamento de Norte de Santander, en calidad de tercero interesado, la cual fue planteada en la demanda, precisándose que no se expresaron las razones que motivaron dicha solicitud.

Como es sabido en el artículo 171<sup>1</sup> de la ley 1437 de 2011 (CPACA) se regula lo relacionado con la admisión de la demanda, y en el numeral 3º se indica que en el auto admisorio se ordenará notificar personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso.

En el capítulo X del CPACA, artículos 223 al 228 se consagra lo atinente a la intervención de terceros en los medios de control que se tramitan ante esta jurisdicción. En el art. 227, ibídem, se señala que en lo no regulado en el CPACA sobre la intervención de terceros, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código general del Proceso.

Así las cosas, es claro para este Despacho que la vinculación en un proceso contencioso administrativo de un tercero, por la calidad de interesado en las resultas de un proceso, tiene su regulación expresa en el numeral 3 del artículo 171 del CPACA, señalándose que habrá lugar a ordenar la notificación de dicho tercero del auto admisorio de la demanda, cuando el Juez considere que según la demanda o del acto demandado, un tercero tiene interés directo en el resultado del proceso.

<sup>1</sup> En el art. 207-numeral 3º, del derogado C.C.A., se consagraba la misma regla a tenerse en cuenta al momento de proferirse el auto admisorio de la demanda.

Es diáfano que el interés del tercero en el proceso tiene que ser directo, esto es, que de acuerdo a la naturaleza de la decisión tomada por la Administración que se demanda por el accionante, resulte imperioso vincular a un tercero respecto del cual sus derechos o intereses se verán directamente afectados, por la eventual anulación del acto demandado.

En el presente asunto se demanda la nulidad parcial de la Resolución No. 00412 del 08 de febrero de 2016, proferida por la Secretario de Despacho Área Dirección Educativa, actuando en nombre y representación de la Nación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una Cesantía Parcial a favor de la señora Ana Mercedes Ortiz Caicedo.

Así las cosas, concluye este Despacho que le asistió razón al A quo, al negar la vinculación del Departamento de Norte de Santander, como tercero interesado, pues el ente territorial no cuenta con un interés directo en el resultado del presente proceso, ya que el tema que se debate es si la señora Ana Mercedes Ortiz Caicedo tiene derecho o no a que se le reconozca y pague la cesantía parcial de manera retroactiva tomando como base el tiempo de servicios a partir de su vinculación como docente mediante el Decreto 000199 del 7 de marzo de 1995 y liquidada sobre el último salario devengado con la totalidad de los factores salariales. Conforme lo señalado en el artículo 56 de la ley 962 de 2005, la competencia legal para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de un docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones, recae en la Nación- Ministerio de Educación, a través del citado Fondo. Es claro que el Departamento de Norte de Santander carece de competencia legal para responder por reclamaciones de docentes relacionadas con el reconocimiento y pago de las prestaciones de servidores afiliados al precitado Fondo.

No puede este Despacho compartir el argumento central del recurso de apelación, relacionado con que consideran las apelantes necesaria la comparecencia en este proceso del Departamento de Norte de Santander, ya que se encuentra interesado en el mismo, no por la expedición del acto administrativo demandado, sino por la importancia que conozca la decisión que en el presente juicio pueda adoptarse.

Y no se puede compartir este argumento central de la impugnación, por cuanto se repite que la vinculación de un tercero, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, es una decisión que toma el Juez en el auto admisorio de la demanda, dependiendo de que el tercero tenga interés directo en el resultado del proceso o dependiendo de la naturaleza de los actos demandados.

El hecho de que la parte actora considere que es importante que el Departamento de Norte de Santander conozca la decisión que se tome en el presente proceso, no es una razón válida para su vinculación, pues no corresponde a la razón que el legislador señaló en el art. 171, numeral 3 del CPACA. Además de lo anterior, los efectos de una sentencia favorable que se llegare a dictar en el presente asunto son interpartes, esto es, solo benefician a la persona que haya obtenido una condena a su favor, y en el evento en que se nieguen las pretensiones de la demanda, ninguna afectación sufren los actos administrativos demandados que seguirán gozando de la presunción de legalidad que los cubre. El efecto que persiguen las apelantes, se puede conseguir sencillamente con hacerse un seguimiento a lo acontecido en el proceso en los sistemas informativos que

maneja el Tribunal, o el Departamento puede acudir a la Relatoría del Tribunal a solicitar copia de la sentencia que se profiera en el presente proceso.

Por lo brevemente expuesto, este Despacho estima procedente confirmar la decisión de negar la vinculación del Municipio de Cúcuta, contenida en el auto apelado, por lo que se:


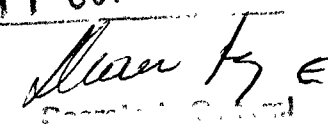
**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Confírmese la decisión adoptada en el auto de fecha 28 de octubre de 2016, proferido por el Juzgado Noveno Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta, por el cual se decidió negar la vinculación del Departamento de Norte de Santander, en calidad de tercero interesado, por las razones expuestas en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones secretariales a que haya lugar.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HERNANDO AYALA PEÑARANDA**  
Magistrado

  
17 OCT 2017  




**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
 San José de Cúcuta, once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00482-00  
**Demandante:** Javier Alberto Moreno Aguirre  
**Demandado:** Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Al efectuar el análisis para proveer la admisión de la demanda de la referencia, encuentra el Despacho que la misma no puede ser admitida en este Tribunal en primera instancia y lo pertinente será devolverla al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, por ser el Despacho al cual inicialmente se le repartió la demanda, conforme con lo siguiente:

1º.- La demanda de la referencia fue presentada por el señor Javier Alberto Moreno Aguirre, a través de apoderado judicial, en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento reglado en el artículo 138 del CPACA, solicitando se declare la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia de fechas 12 de septiembre de 2016 y 1 de noviembre de 2016, proferidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional y el Inspector Delegado, respectivamente, por medio de los cuales se impuso al actor una multa de 55 días de sueldo.

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, mediante auto del 22 de junio de 2017, folio 58, declaró la falta de competencia para conocer de la demanda y en consecuencia ordenó la remisión del expediente a este Tribunal por considerar que la competencia en primera instancia le corresponde a esta Corporación.

En la parte considerativa se citó la providencia del 8 de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, M.P. Dr Alfonso Vargas Rincón, y con base en ello se concluyó por el Juzgado que en el presente asunto los actos administrativos acusados versan sobre asuntos disciplinarios que fueron proferidos por funcionarios con potestad disciplinaria, diferentes al Procurador, por lo cual el competente para conocer del presente asunto es este Tribunal.

2 - Este Despacho considera que el presente asunto no es de competencia del Tribunal en primera instancia, y por ello no puede compartir la tesis del Juzgado remitente, conforme las siguientes razones

2.1.- La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió por importancia jurídica el auto del 30 de marzo de 2017, rad: 2016-000674, actor José Edwin Gómez Martínez, con ponencia del Consejero Cesar Palomino Cortes, mediante el cual se adoptaron reglas de competencia para conocer tanto del Consejo de Estado como de los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos, de las demandas contra actos administrativos expedidos en materia disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación y demás entidades del Estado, en aras de garantizar el principio de doble instancia.

En dicha providencia se estableció que los Tribunales Administrativos tienen competencia para conocer en primera instancia de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que imponen sanciones de multa, entre otras, expedidas por autoridades de cualquier orden, distintas de la Procuraduría General de la Nación, cuanto tengan una cuantía superior a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (300 SMLMV)

2.2.- En el presente caso la parte accionante demanda la nulidad de los fallos disciplinarios mediante los cuales se le impuso al señor Javier Alberto Moreno Aguirre una multa de 55 días de salario, tal como consta en la parte resolutive de los fallos disciplinarios que obran en el C.D. anexo a la demanda, y así se solicita por la parte actora en las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, la cuantía de las pretensiones de la demanda de la referencia, ascienden a la cantidad de 87.5 SMLMV, teniéndose como tal la pretensión de pago de perjuicios morales, e incluso sumándose el valor de la multa de 55 días de salario, es evidente que la cuantía no supera en ningún caso los 300 SMLMVM, como para que el proceso sea de competencia en primera instancia para este Tribunal.

Es más, conforme lo previsto en el art. 157 del CPACA, en casos como el presente la cuantía se determina por el valor de la multa impuesta, por lo cual es totalmente claro que la cuantía del presente asunto asciende a la cantidad de \$2.480.455.00, (4 SMLMV) que es el valor de los 55 días de sueldo del accionante, por todo lo cual no hay ninguna duda que el presente proceso debe ser conocido en primera instancia por los Juzgados Administrativos.

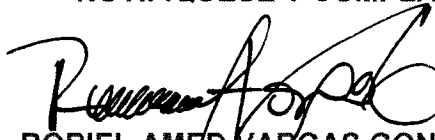
De tal manera que, en aplicación del artículo 168 de la Ley 1437 de 2011<sup>1</sup>, se declarará la falta de competencia para el conocimiento del presente asunto en primera instancia por este Tribunal, y se dispondrá devolver el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, conforme lo reglado en el numeral 3 del artículo 156 del C.P.A.C.A., por ser este el Despacho al cual le fue repartido inicialmente la demanda de la referencia.


**En consecuencia se dispone:**

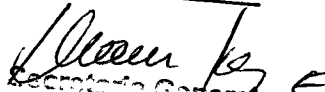
**PRIMERO:** Declarar la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por el factor cuantía, para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por el señor Javier Alberto Moreno Aguirre, a través de apoderado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Por Secretaría devuélvase el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, para su conocimiento y háganse las anotaciones y registros secretariales a que haya lugar.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ**  
**MAGISTRADO**

  
Por resolución de 17 de octubre de 2017, por la cual se declaró la falta de competencia para el conocimiento del presente asunto en primera instancia por este Tribunal, y se dispondrá devolver el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, conforme lo reglado en el numeral 3 del artículo 156 del C.P.A.C.A., por ser este el Despacho al cual le fue repartido inicialmente la demanda de la referencia.  
17 OCT 2017

  
Secretaría General

<sup>1</sup> ARTICULO 168. FALTA DE JURISDICCION O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdiccion o de competencia, mediante decision motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente en caso de que existiere a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
 San José de Cúcuta, once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00484-00  
**Demandante:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
**Demandado:** Nación- Ministerio de Salud y Protección Social-  
 Superintendencia Nacional de Salud- Fiduprevisora S.A.

Al efectuar el análisis para proveer la admisión de la demanda de la referencia, encuentra el Despacho que la misma no puede ser admitida en este Tribunal en primera instancia y lo pertinente será remitirla a los Juzgados Administrativos de Cúcuta, conforme con lo siguiente:

1º.- La demanda de la referencia fue presentada por la ESE HUEM, a través de apoderado judicial, en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento reglado en el artículo 138 del CPACA, solicitando se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. (i) AL-08277 del 12 de agosto de 2016, expedida por el Liquidador de Caprecom EICE en liquidación, por medio de la cual se califica y gradua una acreencias oportunamente presetrnada con cargo a la masa liquidatoria de la Caja Caprecom y (ii) AL-14582 del 1 de diciembre de 2016, por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición. Como restablecimiento del derecho se pide que se ordene graduar y calificar el valor aceptado en la suma de \$161.877.894.00, prelación de crédito B, en la acreencia identificada No. A52.00119.

En el escrito de la demanda dentro del acápite denominado RAZONAMEINTO DE COPETENCIA Y CUANTIA<sup>1</sup>, se señala que la misma es de competencia del Tribunal en primera instancia dado que la cuantía no excede de 100 salarios mínimos legales mensuales. Se precisa que la cuantía se estima así: *“Valor objeto del negocio jurídico CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$161.877.894.00)”*

Es evidente para el Despacho que en la demanda se incurrió en una incongruencia al señalarse que es competente este Tribunal para conocer de la demanda de la referencia en primera instancia, no obstante que señala que la cuantía no excede de 100 salarios mínimos legales mensuales. Dados los hechos narrados en la demanda y las pretensiones de la misma, se controvierten actos administrativos de una autoridad del orden nacional, por lo cual el proceso solamente podría ser conocido por este Tribunal en primera instancia, si llegare a sobrepasar de la cantidad de trescientos (300) salarios mínimos, lo cual no ocurre pues claramente la cuantía de las pretensiones es la suma de \$161.877.894.00 que equivalen a 221.7 SMLMV.

<sup>1</sup> Ver folio 21 del expediente



2.- Como es sabido, para efectos de determinar la competencia de este Tribunal para conocer del asunto de la referencia en primera instancia, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

*“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. (...)”*

Por su parte en el artículo 152 del CPACA se establece las cuantías de los procesos que conoce el Tribunal en primera instancia. En el numeral 3º se señala lo siguiente:

*“3.- De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”*

Acorde con los apartes normativos anteriormente citados, en el presente asunto el valor de la pretensión mayor asciende a la suma de \$161.877.894.00 que equivalen a 221.7 SMLMV, la cual resulta inferior a la cantidad de 300 SMLMV, lo cual genera que la competencia radique en los Juzgados en primera instancia, en los términos del artículo 155 numeral 3º de la Ley 1437 de 2011, ya que la competencia del Tribunal en primera instancia es para asuntos en los que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como ya se explicó anteriormente, en el asunto sub examine se demanda la nulidad parcial de dos Resoluciones expedidas por el liquidador de Caprecom, por medio de las cuales se califica y gradúa una acreencia presentada por la ESE HUEM, y la cuantía de las pretensiones de la demanda no excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De tal manera que, en aplicación del artículo 168 de la Ley 1437 de 2011<sup>2</sup>, se declarará la falta de competencia para el conocimiento del presente asunto en primera instancia por este Tribunal, y se dispondrá devolver el expediente a la oficina de apoyo judicial – reparto- para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta.

#### **En consecuencia se dispone:**

**PRIMERO: Declarar** la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por el factor cuantía, para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad y restablecimiento de la referencia presentada por la E.S.E. HUEM, a través de apoderado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

<sup>2</sup> ARTICULO 168. FALTA DE JURISDICCION O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.

**SEGUNDO:** Por Secretaría **remitase** el expediente a la oficina de apoyo judicial — reparto- para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta.

**TERCERO.** Háganse las anotaciones y registros secretariales a que haya lugar.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**


  
**ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ**  
**MAGISTRADO**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**CONSEJO DE ESTADO**

Por anotación en FOLIO 20, se remite a las partes la providencia anterior, a las 09:00 am.

ley 17 OCT 2017

  
Secretaría General



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
 San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00207-00  
**Demandante:** Emperatriz Torrado Ortega  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento Norte de Santander

En atención al informe secretarial que antecede, sería del caso fijar fecha para la práctica de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sino se advirtiera que el conocimiento del presente proceso no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual se declarará la falta de competencia por el factor cuantía para seguir conociendo del mismo, conforme a lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

1.1 En el escrito de demanda presentado por la señora Emperatriz Torrado García a través de apoderados, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución No. **00530 del 10 de febrero de 2016**, expedida por la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho.

1.2 El expediente de la referencia, fue inicialmente promovido ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, donde el conocimiento del mismo le correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, tal como puede observarse en el acta de reparto obrante a folio 35.

1.3 El Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, mediante auto de fecha 10 de marzo de 2017, resolvió declararse sin competencia en virtud de la cuantía, al señalar que las pretensiones de restablecimiento estimadas por la parte actora, superan los 50 SMLMV, y por tal razón ordenó su remisión a esta Corporación.

1.4 Mediante acta de reparto de fecha 23 de marzo de 2017, el conocimiento de la demanda de la referencia le correspondió a este Despacho, el cual mediante auto de fecha 23 de mayo de 2017 profirió auto admisorio de la misma.

### II. CONSIDERACIONES

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

**“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

**“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

**“Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen. (...) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (...) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.**” (Se resalta).

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la resolución **No. 00530 del 10 de febrero de 2016**, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación de la demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se estimó la cuantía de la demanda, en la suma de \$38.136.460, correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por la demandada en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho admitió la demanda de la referencia por considerar que tenía competencia por el factor cuantía, tal decisión se corrige para acoger el criterio mayoritario de esta Corporación en casos similares al presente, por lo que revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el

tiempo de servicios de la misma desde el año 1998 al 2014, que corresponde a la vida laboral del señora Emperatriz Torrado Ortega.

En el presente asunto el objeto de la demanda se contrae a determinar, si la demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por la servidora pública para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien es cierto en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría la demandante por concepto de cesantías liquidadas de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por un tiempo superior a 20 años, no es menos cierto que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente, sin que por ello se catalogue como una prestación periódica, por lo cual resulta razonable ajustar la cuantía a lo que en punto de discusión se ha resuelto por el legislador respecto de las prestaciones que sí tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$38.136.460. suma que al ser dividida entre los 17 años que se toman como vida laboral de la actora en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$ 2.243.321 valor que por el espacio de tres años no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; para que la competencia en primera instancia le corresponda a esta Corporación, conforme lo reglado en el numeral 2 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, estima el Despacho que lo procedente será declarar la falta de competencia dentro del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del C.G.P., y como consecuencia ordenar devolver el expediente al **Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta**, quién en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento, dado que a dicho Juzgado le fue repartida inicialmente la demanda de la referencia.

**En consecuencia se dispone:**

- 1.- **Declarar la falta de competencia** del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por el factor cuantía, para continuar conociendo en primera instancia de la demanda de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.
- 2.- En consecuencia, por Secretaría previas anotaciones secretariales de rigor, **devuélvase** el expediente de la referencia al Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSEJO CANCELARIO

Por protocolo en FOLIO 23, página 13  
ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ, a las 10:00 am.

MAGISTRADO 17 OCT 2017.

Secretaría General

<sup>1</sup> Para el año 2017 equivale a \$36'885 850.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER  
San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00194-00  
**Demandante:** Marina Ordoñez Duarte  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Municipio de San José de Cúcuta

En atención al informe secretarial que antecede, sería del caso fijar fecha para la práctica de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sino se advirtiera que el conocimiento del presente proceso no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, a los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual se declarará la falta de competencia por el factor cuantía para seguir conociendo del mismo, conforme a lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

1.1 En el escrito de demanda presentado por la señora Marina Ordoñez Duarte a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución **No. 0454 del 08 de septiembre de 2016**, expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho.

1.2 El expediente de la referencia, fue inicialmente promovido ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, donde el conocimiento del mismo le correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, tal como puede observarse en el acta de reparto obrante a folio 37.

1.3 El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, mediante auto de fecha 01 de marzo de 2017, resolvió declararse sin competencia en virtud de la cuantía, al señalar que las pretensiones de restablecimiento estimadas por la parte actora, superan los 50 SMLMV, y por tal razón ordenó su remisión a esta Corporación.

1.4 Mediante acta de reparto de fecha 21 de marzo de 2017, el conocimiento de la demanda de la referencia le correspondió a este Despacho.

**II. CONSIDERACIONES**

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

**“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

**“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

**“Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen. (...) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (...) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.**” (Se resalta).

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la resolución **No. 0454 del 08 de septiembre de 2016**, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación de la demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se estimó la cuantía de la demanda, en la suma de \$42.241.755, correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por la demandada en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho admitió la demanda de la referencia por considerar que tenía competencia por el factor cuantía, tal decisión se corrige para acoger el criterio mayoritario de esta Corporación en casos similares al presente, por lo que revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaria de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el tiempo de

servicios de la misma desde el año 1995 al 2015, que corresponde a la vida laboral de la señora Marina Ordoñez Duarte.

En el presente asunto el objeto de la demanda se contrae a determinar, si la demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por la servidora pública para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien es cierto en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría la demandante por concepto de cesantías liquidadas de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por un tiempo superior a 20 años, no es menos cierto que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente, sin que por ello se catalogue como una prestación periódica, por lo cual resulta razonable ajustar la cuantía a lo que en punto de discusión se ha resuelto por el legislador respecto de las prestaciones que sí tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

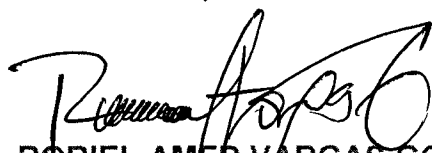
En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$42.241.755, suma que al ser dividida entre los 20 años que se toman como vida laboral de la actora en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$ 2.112.087, valor que por el espacio de tres años no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; para que la competencia en primera instancia le corresponda a esta Corporación, conforme lo reglado en el numeral 2 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, estima el Despacho que lo procedente será declarar la falta de competencia dentro del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del C.G.P., y como consecuencia ordenar devolver el expediente al **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, quién en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento, dado que a dicho Juzgado le fue repartida inicialmente la demanda de la referencia.

**En consecuencia se dispone:**

- 1.- **Declarar la falta de competencia** del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por el factor cuantía, para continuar conociendo en primera instancia de la demanda de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.
- 2.- En consecuencia, por Secretaría previas anotaciones secretariales de rigor, **devuélvase** el expediente de la referencia al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

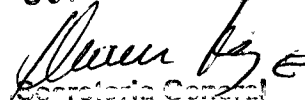
  
**ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ**  
 MAGISTRADO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
 NORTE DE SANTANDER  
 CONFERENCIA SECRETARIAL

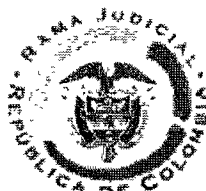
Se notifica en el momento, a las partes la providencia anterior, a las 0:00 a.m.

Ley 17 OCT 2017

  
 Secretaría General

<sup>1</sup> Para el año 2017 equivale a \$36'885 850.00





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00208-00  
**Demandante:** Omaira Ibañez Espitia  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento Norte de Santander

En atención al informe secretarial que antecede, sería del caso fijar fecha para la práctica de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sino se advirtiera que el conocimiento del presente proceso no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual se declarará la falta de competencia por el factor cuantía para seguir conociendo del mismo, conforme a lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

1.1 En el escrito de demanda presentado por la señora Omaira Ibañez Espitia a través de apoderados, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución No. **000180 del 26 de enero de 2016**, expedida por la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho.

1.2 El expediente de la referencia, fue inicialmente promovido ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, donde el conocimiento del mismo le correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, tal como puede observarse en el acta de reparto obrante a folio 35.

1.3 El Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, mediante auto de fecha 10 de marzo de 2017, resolvió declararse sin competencia en virtud de la cuantía, al señalar que las pretensiones de restablecimiento estimadas por la parte actora, superan los 50 SMLMV, y por tal razón ordenó su remisión a esta Corporación.

1.4 Mediante acta de reparto de fecha 23 de marzo de 2017, el conocimiento de la demanda de la referencia le correspondió a este Despacho, el cual mediante auto de fecha 23 de mayo de 2017 profirió auto admisorio de la misma.

**II. CONSIDERACIONES**

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

**“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

**“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

**“Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen. (...) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (...) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.**” (Se resalta).

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la resolución **No. 000180 del 26 de enero de 2016**, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación de la demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se estimó la cuantía de la demanda, en la suma de \$35.459.327, correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por la demandada en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho admitió la demanda de la referencia por considerar que tenía competencia por el factor cuantía, tal decisión se corrige para acoger el criterio mayoritario de esta Corporación en casos similares al presente, por lo que revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el

tiempo de servicios de la misma desde el año 1995 al 2014, que corresponde a la vida laboral del señora Omaira Ibañez Espitia.

En el presente asunto el objeto de la demanda se contrae a determinar, si la demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por la servidora pública para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien es cierto en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría la demandante por concepto de cesantías liquidadas de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por un tiempo superior a 20 años, no es menos cierto que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente, sin que por ello se catalogue como una prestación periódica, por lo cual resulta razonable ajustar la cuantía a lo que en punto de discusión se ha resuelto por el legislador respecto de las prestaciones que sí tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$35.459.327, suma que al ser dividida entre los 19 años que se toman como vida laboral de la actora en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$ 1.866.280 valor que por el espacio de tres años no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; para que la competencia en primera instancia le corresponda a esta Corporación, conforme lo reglado en el numeral 2 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, estima el Despacho que lo procedente será declarar la falta de competencia dentro del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del C.G.P., y como consecuencia ordenar devolver el expediente al **Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta**, quién en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento, dado que a dicho Juzgado le fue repartida inicialmente la demanda de la referencia.

**En consecuencia se dispone:**

- 1.- **Declarar la falta de competencia** del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por el factor cuantía, para continuar conociendo en primera instancia de la demanda de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.
- 2.- En consecuencia, por Secretaría previas anotaciones secretariales de rigor, **devuélvase** el expediente de la referencia al Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLESE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ  
MAGISTRADO  
17 OCT 2017

<sup>1</sup> Para el año 2017 equivale a \$36'885.850 00.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

<b>Medio de Control:</b>	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>
<b>Radicado No:</b>	54-001-23-33-000- <u>2017-00195</u> -00
<b>Demandante:</b>	Astrid Amaya Rueda
<b>Demandado:</b>	Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Municipio de San José de Cúcuta

En atención al informe secretarial que antecede, sería del caso fijar fecha para la práctica de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sino se advirtiera que el conocimiento del presente proceso no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, a los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual se declarará la falta de competencia por el factor cuantía para seguir conociendo del mismo, conforme a lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

1.1 En el escrito de demanda presentado por la señora Astrid Amaya Rueda a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución **No. 0450 del 08 de septiembre de 2016**, expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho.

1.2 El expediente de la referencia, fue inicialmente promovido ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, donde el conocimiento del mismo le correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, tal como puede observarse en el acta de reparto obrante a folio 37.

1.3 El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, mediante auto de fecha 01 de marzo de 2017, resolvió declararse sin competencia en virtud de la cuantía, al señalar que las pretensiones de restablecimiento estimadas por la parte actora, superan los 50 SMLMV, y por tal razón ordenó su remisión a esta Corporación.

1.4 Mediante acta de reparto de fecha 21 de marzo de 2017, el conocimiento de la demanda de la referencia le correspondió a este Despacho.

### II. CONSIDERACIONES

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA– en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

**“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

**“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

**“Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen. (...) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (...) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.**” (Se resalta).

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la resolución **No. 0450 del 08 de septiembre de 2016**, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación de la demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se estimó la cuantía de la demanda, en la suma de \$39.333.298, correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por la demandada en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho admitió la demanda de la referencia por considerar que tenía competencia por el factor cuantía, tal decisión se corrige para acoger el criterio mayoritario de esta Corporación en casos similares al presente, por lo que revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaria de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el tiempo de

servicios de la misma desde el año 1994 al 2015, que corresponde a la vida laboral de la señora Astrid Amaya Rueda.

En el presente asunto el objeto de la demanda se contrae a determinar, si la demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por la servidora pública para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien es cierto en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría la demandante por concepto de cesantías liquidadas de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por un tiempo superior a 20 años, no es menos cierto que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente, sin que por ello se catalogue como una prestación periódica, por lo cual resulta razonable ajustar la cuantía a lo que en punto de discusión se ha resuelto por el legislador respecto de las prestaciones que sí tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$39.333.298, suma que al ser dividida entre los 21 años que se toman como vida laboral de la actora en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$ 1.873.014, valor que por el espacio de tres años no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; para que la competencia en primera instancia le corresponda a esta Corporación, conforme lo reglado en el numeral 2 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, estima el Despacho que lo procedente será declarar la falta de competencia dentro del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del C.G.P., y como consecuencia ordenar devolver el expediente al **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, quién en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento, dado que a dicho Juzgado le fue repartida inicialmente la demanda de la referencia.

En consecuencia se dispone:

- 1.- **Declarar la falta de competencia** del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por el factor cuantía, para continuar conociendo en primera instancia de la demanda de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.
- 2.- En consecuencia, por Secretaría previas anotaciones secretariales de rigor, **devuélvase** el expediente de la referencia al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSEJO PRESIDENCIAL  
Robiel Améd Vargas González  
MAGISTRADO  
17 OCT 2017  
[Firma]

<sup>1</sup> Para el año 2017 equivale a \$36'885 850 00.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
 San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00497-00  
**Demandante:** Naudy Katherine Bermúdez Grateron  
**Demandado:** Departamento Administrativo de Transito de Villa del Rosario.

Al efectuar el análisis para proveer la admisión de la demanda de la referencia, encuentra el Despacho que la misma no puede ser admitida en este Tribunal en primera instancia y lo pertinente será remitirla a los Juzgados Administrativos de Cúcuta, conforme con lo siguiente:

1º.- La demanda de la referencia fue presentada por la señora Naudy Katherine Bermúdez Grateron, a través de apoderado judicial, en el ejercicio de la acción de nulidad regula en el artículo 84 del C.C.A, solicitando se declare la nulidad de la Resolución u orden de comparendo 5487400000014069255 del 2 de agosto de 2016, expedida por la Inspectora de Tránsito y Transporte de Villa de Rosario.

A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene la nulidad del comparendo No. 5487400000014069255.

En el escrito de la demanda dentro del acápite denominado COMPETENCIA Y CUANTIA<sup>1</sup>, se señala que “es competencia de este juzgado administrativo, en primera instancia, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde se presentaron los hechos en el Municipio de Villa del Rosario”.

Es evidente para el Despacho que en la demanda se incurre en una grave confusión al presentar la demanda de la referencia ante este Tribunal, cuando es evidente que la misma no puede ser conocida por esta Corporación en primera instancia, dado que la cuantía de la misma resulta ser muy inferior de la cantidad 300 SMLMV que es el monto establecido por la ley 1437 de 2011 para que este Tribunal conozca de demandas de nulidad y restablecimiento contra actos de cualquier autoridad en primera instancia.

2.- Como es sabido, para efectos de determinar la competencia de este Tribunal para conocer del asunto de la referencia en primera instancia, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, que dispone:

**“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos

<sup>1</sup> Ver folio 21 del expediente

*últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. (...)"*

Por su parte en el artículo 152 del CPACA se establece las cuantías de los procesos que conoce el Tribunal en primera instancia. En el numeral 3º se señala lo siguiente:

*"3.- De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes..."*

Acorde con los apartes normativos anteriormente citados, en el presente asunto la cuantía de la pretensión de nulidad del comparendo 5487400000014069255 del 2 de agosto de 2016, asciende al valor de \$344.727.00., que es el valor de la multa a pagar por la infracción de tránsito por conducir el vehículo a la velocidad superior a la máxima permitida, tal como se le indicó a la accionante en el comparendo remitido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte que obra al folio 11 del expediente.

Por lo anterior, dicha cuantía resulta muy inferior a la cantidad de 300 SMLMV, lo cual genera que la competencia radique en los Juzgados Administrativos de Cúcuta en primera instancia, en los términos del artículo 155 numeral 3º de la Ley 1437 de 2011, ya que la competencia del Tribunal en primera instancia es para asuntos en los que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como ya se explicó anteriormente, el valor de la cuantía de las pretensiones del presente asunto no alcanza a pasar de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por lo cual es totalmente diáfano que la competencia para conocer del presente asunto radica en los Juzgados Administrativos de Cúcuta en primera instancia, conforme lo previsto en el numeral 3º del art. 152 de la ley 1437 de 2011.

Dada la falta de competencia de este Tribunal para conocer de la demanda de la referencia, no hay lugar a entrar a analizar si se cumplen o no los requisitos de ley para que la demanda pueda ser admitida por esta jurisdicción. No obstante el Despacho no puede pasar por alto que la demanda de la referencia incurre en unas falencias jurídicas verdaderamente inaceptables dado que se está presentado la demanda el día 12 de julio de 2017 y se cita como fundamento legal para incoar la demanda el artículo 85 del C.C.A. y las causales de nulidad previstas en el art. 84, ibídem, cuando dicho Código fue derogado desde el 2 de julio de 2012, en virtud de la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. contenido en la ley 1437 de 2011.

Resulta sorprendente, por decir lo menos, para este Despacho que el apoderado de la parte actora esté presentando a estas alturas una demanda ante esta jurisdicción, sin tener en cuenta el cumplimiento de los presupuestos y requisitos de forma para incoar demandas exigidos por el C.P.A.C.A., contenido en la ley 1437 de 2011.



De tal manera que, en aplicación del artículo 168 de la Ley 1437 de 2011<sup>2</sup>, se declarará la falta de competencia para el conocimiento del presente asunto en primera instancia por este Tribunal, y se dispondrá devolver el expediente a la oficina de apoyo judicial – reparto- para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta.

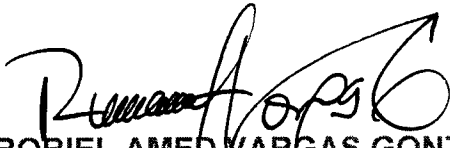
**En consecuencia se dispone:**


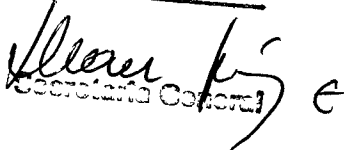
**PRIMERO:** Declarar la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por el factor cuantía, para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad y restablecimiento de la referencia presentada por la señora Naudy Katherine Bermúdez Grateron, a través de apoderado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Por Secretaría **remítase** el expediente a la oficina de apoyo judicial – reparto- para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta.

**TERCERO.** Háganse las anotaciones y registros secretariales a que haya lugar.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ**  
MAGISTRADO

 **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER**  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Por anotación en el expediente, remitido a las  
partes la proveyendo a la ley, a las 8:50 am.  
17 OCT 2017  
  
Secretaría General

<sup>2</sup> ARTICULO 168 FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
 San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00518-00  
**Demandante:** Gustavo Salvador Meneses Bayona  
**Demandado:** Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En atención al informe secretarial que antecede y dado que la demanda presentada por el señor **Gustavo Salvador Meneses Bayona**, a través de apoderado constituido, cumple con los requisitos formales señalados en la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", habrá de admitirse y ordenarse el trámite de ley.

**En consecuencia, se dispone:**

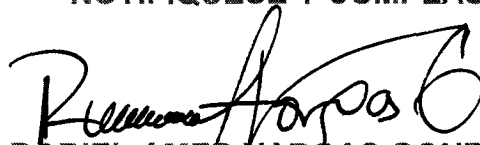
- 1.- **Admitir** la demanda interpuesta por el señor **Gustavo Salvador Meneses Bayona**, a través de apoderado constituido, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en contra de la Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2. **Téngase** como acto administrativo demandado el artículo 1º de la Resolución No. 0076 del 12 de enero de 2017, expedida por la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, "*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*".
3. **Notifíquese** por estado electrónico este proveído a la parte demandante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011.
4. **Notifíquese** personalmente la admisión de la demanda a la **Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, de conformidad con el artículo 171 del CPACA.
- 5.- **Notifíquese** personalmente la admisión de la demanda al señor **Procurador Delegado** para actuar ante este Tribunal (Reparto) y a la **Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado**, en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del CGP.
6. **Córrase** traslado de la demanda a la entidad demandada y al Ministerio Público por el término de treinta (30) días sin necesidad de fijación alguna por Secretaría, una vez vencido el término señalado en el inciso 5 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, para los efectos previstos en lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011.
7. Conforme al numeral 4º del artículo 171 del C.P.A.C.A, **fijese** la suma de **cuarenta mil pesos (\$40.000.00)**, como gastos ordinarios del proceso, los cuales

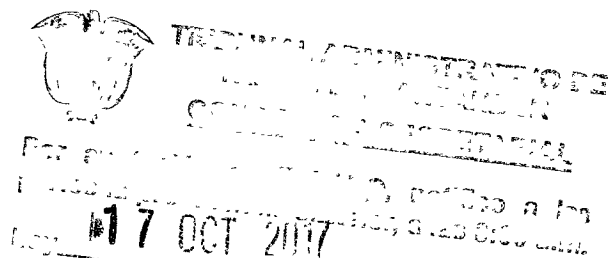
deberán ser consignados por la parte accionante en la cuenta de gastos del proceso que al efecto tiene el Tribunal en el Banco Agrario de la ciudad, **Nro. 45101200201-9, convenio No. 11275**, para lo cual se señala un término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto; con la prevención de lo señalado en el artículo 178 ibídem.

8. **Adviértase** a la entidad pública demandada, que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, durante el término para dar respuesta de la demanda deberán allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto de este proceso que se encuentren en su poder. La inobservancia de dicho deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario (a) encargado (a) del asunto.

9. **Reconózcase** personería para actuar al doctor Alfonso Gómez Aguirre, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido, obrante al folio 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ  
MAGISTRADO





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

**Medio de Control:** Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
**Radicado No:** 54-001-23-33-000-2017-00193-00  
**Demandante:** María Eugenia Angarita Navarro  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento Norte de Santander

En atención al informe secretarial que antecede, sería del caso fijar fecha para la práctica de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sino se advirtiera que el conocimiento del presente proceso no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, a los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual se declarará la falta de competencia por el factor cuantía para seguir conociendo del mismo, conforme a lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

1.1 En el escrito de demanda presentado por la señora María Eugenia Angarita Navarro a través de apoderados, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución No. **2215 del 15 de junio de 2016**, expedida por la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho.

1.2 El expediente de la referencia, fue inicialmente promovido ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cúcuta, donde el conocimiento del mismo le correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, tal como puede observarse en el acta de reparto obrante a folio 35.

1.3 El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, mediante auto de fecha 01 de marzo de 2017, resolvió declararse sin competencia en virtud de la cuantía, al señalar que las pretensiones de restablecimiento estimadas por la parte actora, superan los 50 SMLMV, y por tal razón ordenó su remisión a esta Corporación.

1.4 Mediante acta de reparto de fecha 21 de marzo de 2017, el conocimiento de la demanda de la referencia le correspondió a este Despacho, el cual mediante auto de fecha 23 de mayo de 2017 profirió auto admisorio de la misma.

### II. CONSIDERACIONES

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

**“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos.

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

**“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

**“Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen. (...) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (...) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.**” (Se resalta).

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la resolución **No. 2215 del 15 de junio de 2016**, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación de la demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se estimó la cuantía de la demanda, en la suma de \$43.817.577, correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por la demandada en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho admitió la demanda de la referencia por considerar que tenía competencia por el factor cuantía, tal decisión se corrige para acoger el criterio mayoritario de esta Corporación en casos similares al presente, por lo que revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el

tiempo de servicios de la misma desde el año 1995 al 2015, que corresponde a la vida laboral del señora María Eugenia Angarita Navarro.

En el presente asunto el objeto de la demanda se contrae a determinar, si la demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por la servidora pública para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien es cierto en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría la demandante por concepto de cesantías liquidadas de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por un tiempo superior a 20 años, no es menos cierto que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente, sin que por ello se catalogue como una prestación periódica, por lo cual resulta razonable ajustar la cuantía a lo que en punto de discusión se ha resuelto por el legislador respecto de las prestaciones que sí tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$43.817.577, suma que al ser dividida entre los 20 años que se toman como vida laboral de la actora en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$ 2.190.878, valor que por el espacio de tres años no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; para que la competencia en primera instancia le corresponda a esta Corporación, conforme lo reglado en el numeral 2 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

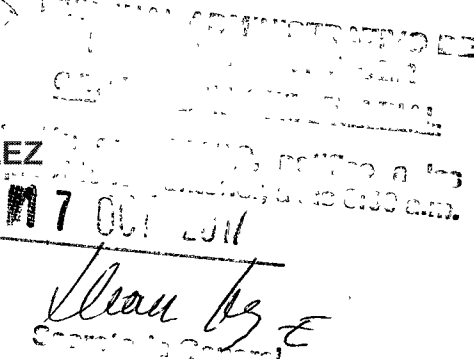
Así las cosas, estima el Despacho que lo procedente será declarar la falta de competencia dentro del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del C.G.P., y como consecuencia ordenar devolver el expediente al **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta**, quién en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento, dado que a dicho Juzgado le fue repartida inicialmente la demanda de la referencia.

**En consecuencia se dispone:**

- 1.- **Declarar la falta de competencia** del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por el factor cuantía, para continuar conociendo en primera instancia de la demanda de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.
- 2.- En consecuencia, por Secretaría previas anotaciones secretariales de rigor, **devuélvase** el expediente de la referencia al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ**  
**MAGISTRADO**



<sup>1</sup> Para el año 2017 equivale a \$36'885 850.00